

11.2 CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLÍTICA E INICIO DEL FIN DE LA HEGEMONÍA PROGRESISTA EN AMÉRICA LATINA

Massimo Modonesi¹

En el estudio de una estructura es necesario distinguir los movimientos orgánicos (relativamente permanentes) de los movimientos que se pueden llamar "de coyuntura" (y se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales). Los fenómenos de coyuntura dependen también de movimientos orgánicos, pero su significado no es de gran importancia histórica; dan lugar a una crítica política mezquina, cotidiana, que se dirige a los pequeños grupos dirigentes y a las personalidades que tienen la responsabilidad inmediata del poder. Los fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social que se dirige a los grandes agrupamientos, más allá de las personas inmediatamente responsables y del personal dirigente.

Antonio Gramsci

La anotación de Antonio Gramsci sugiere la necesidad de operar metodológicamente una distinción y una articulación entre lo orgánico y lo coyuntural, lo permanente y lo ocasional. Esta advertencia resulta clave para tratar de interpretar las luchas sociales latinoamericanas de los últimos años, buscando reconocer, detrás de las coyunturas, la organicidad de los fenómenos de fondo. Al mismo tiempo, en el marco de este planteamiento, hay que establecer otro nivel de distinción para poder apreciar la especificidad de coyunturas críticas o, dicho de una manera más precisa, la construcción desde debajo del escenario y de las situaciones de crisis política, frente a la sucesión relativamente ordinaria de acontecimientos conflictuales que, en su sedimentación, *orgánicamente* conforman y reflejan la cotidiana reproducción de las sociedades capitalistas latinoamericanas.

¹ Historiador y sociólogo. Profesor titular de la FCPyS de la UNAM. Director de la revista OSAL de CLACSO.

Las coyunturas críticas ligadas a procesos de irrupción popular –en forma sobresaliente en Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México- cobraron una importancia crucial en la historia del tiempo presente latinoamericano, en particular entre 1994 y 2006, ya que revelaron una fractura en la legitimidad del neoliberalismo y efectivamente quebraron su hegemonía, abrieron brechas en la dominación y la subalternidad para expresar el contrapoder acumulado por movimientos que pudieron y supieron proyectar su impulso antagónico y su capacidad autónoma. La irrupción de fenómenos extraordinarios de movilización rebasó temporalmente los sistemas de partidos y los obligó a modificarse substancialmente, sea propiciando el surgimiento de nuevos actores partidarios (en Venezuela, Bolivia, Ecuador, parcialmente en Argentina, posteriormente en Perú y México), sea modificando profundamente las orientaciones electorales (en Brasil, Uruguay, temporalmente en Paraguay y Colombia, recientemente en Chile). En este pasaje hacia lo electoral, de la oposición social desde abajo a la cristalización institucional, se gestó el ciclo de los llamados gobiernos *progresistas* en América Latina.² Entre distintos momentos de la década pasada, aún con saldos y sobresaltos específicos, estos gobiernos progresistas lograron asentarse hegemónicamente, reproducirse en el tiempo a partir de la construcción de consenso frente a las oposiciones de derecha y llevar a cabo, en la mediana duración, una combinación de procesos de transformación y refuncionalización progresivo-conservadora que, por su carácter contradictorio y sus apuestas desmovilizadoras, hemos definido *revoluciones pasivas* (Cf. Modonesi, 2013).

Desde una perspectiva transversal, trataremos de mostrar rasgos de procesos latinoamericanos diversos en sus especificidades nacionales pero unidos por hilos conductores que es pertinente seguir y destacar. En aras de avanzar algunas claves de lectura que permitan descifrar la coyuntura que atraviesa los países gobernados por fuerzas progresistas, es decir la gran mayoría de la región³, podemos

² Me adhiero y promuevo la asignación convencional de este nombre en tanto permite dar cuenta de algunos rasgos generales y transversales, pero también de una tensión fundamental en la medida en que, junto al progresismo entendido como una atención hacia lo social -un principio de redistribución o de justicia social- aparece una acepción de la idea de progreso centrada en el crecimiento de las fuerzas productivas, lo cual pone en segundo plano la transformación de las relaciones de producción y los costos sociales y ambientales propios de los grandes saltos modernizadores.

³ Me refiero directamente a los gobiernos progresistas de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela) y sólo indirectamente a los centroamericanos

desenmarañar y reconocer algunas tendencias entrecruzadas y solo aparentemente contradictorias: la desmovilización y la despolitización del conflicto propias de los fenómenos de revolución pasiva, la debilidad de las oposiciones de izquierda, la persistencia de altos niveles de conflictividad social ordinaria y el incremento del protagonismo de las derechas, tanto en el terreno electoral e institucional como en el de la movilización y la protesta.

Los indignados brasileños: excepción que confirma la regla

El fenómeno de los indignados brasileños, aún siendo un estallido que parece haberse acotado en un tiempo y un espacio limitado, es sintomático tanto del inicio del fin de la revolución pasiva como dispositivo hegemónico, de su persistencia en forma de deriva conservadora y de la debilidad relativa de las izquierdas radicales en esta gran país latinoamericano.

El acontecimiento conflictivo más destacado del 2013 fue, sin lugar a dudas, la oleada de movilizaciones que en Brasil criticaron e impugnaron, alrededor de la Copa Confederaciones de fútbol, el aumento del transporte y los gastos faraónicos en vista del próximo mundial de 2014 (Cf. Zibechi, 2013). Estas movilizaciones pusieron de relieve una serie de cuestiones cruciales para Brasil y para América Latina en su conjunto en tanto sacudieron el equilibrio político de la versión brasileña de la revolución pasiva. Al mismo tiempo, la irrupción, para usar una fórmula de Gramsci fue “esporádica e inorgánica” y, por lo tanto, aún afectando su solidez hegemónica, dejó intacto el régimen petista -o lulista si se prefiere esta denominación- en su dimensión institucional al punto de que los pronósticos para las próximas elecciones indican que la opinión pública apuesta por la continuidad, encarnada por la alianza política y el bloque de poder que sostiene a Dilma.

Al mismo tiempo, al margen del reflujo de la protesta que mostró los límites de politización y organización del movimiento, hay que destacar que la movilización masiva marcó una ruptura significativa a nivel simbólico y en el plano experiencial. La juventud brasileña que creció en tiempos de lulismo no había tenido y menos aún construido una oportunidad de esta magnitud para expresar su malestar y su

(Nicaragua, El Salvador), aunque creo que se puedan extender las consideraciones de orden general también a estas experiencias. No incluyo a Chile por la cercanía de la instalación del gobierno encabezado por Michelle Bachelet ni a Perú porque la caracterización progresista del gobierno de Ollanta Humala es objeto de debate.

descontento y, al mismo tiempo, experimentar una práctica de movilización con todos los aprendizajes respectivos, aún limitados y acotados, en términos de politización y de capacidad de acción colectiva, de organización. Es cierto que, por la misma naturaleza de este tipo de protesta y de la capacidad de recuperación de consenso del régimen, el aprendizaje puede haberse truncado y cargado de desilusión y de frustración engendrando profundas tendencias hacia la pasividad, la desmovilización y la despolitización.

No obstante, aun considerando las contradicciones y los límites, el saldo experiencial socio-político, a diferencia del político-institucional, es positivo y constituye un punto de partida importante cuyas consecuencias no se pueden prever pero pudieran llegar a manifestarse, en el corto plazo, en ocasión de las probables protestas en ocasión del mundial de fútbol de junio 2014. En el mediano plazo, por otra parte, no se descarta la posibilidad de que esta generación adquiera una postura crítica, se mantenga activa y participativa y contribuya a construir una alternativa reforzando los movimientos de oposición a la hegemonía lulista (Cf. Modonesi, 2013b).

Abriendo un paréntesis, vale la pena señalar que la experiencia de las movilizaciones brasileñas de 2013 se conecta con un formato particular de protesta. Un formato emergente que recupera patrones antiguos de levantamientos multitudinarios, asume la forma de una irrupción repentina y efímera en torno a demandas que van desde un agravio puntual y particular que, como gota que derrama el vaso, sirve de punto de articulación para manifestar un descontento generalizado que puede incluir posturas antisistémicas. Como ha sido observado, estos estallidos urbanos son impulsados por un protagonismo juvenil que sigue pautas de organización-conexión reticulares favorecidas por el uso de nuevas tecnologías. En América Latina, después del antecedente del altermundismo y los Foros Sociales, que mantenía modalidades más estructuradas, este patrón hizo su aparición en el movimiento #YoSoy132 en México en el contexto del ciclo primavera árabe-indignados-occupy Wall Street-Parque Gezi. Este formato puede sintetizarse en la experiencia de los *indignados*, ya que ésta fue más duradera y trató de teorizarse a sí misma –o fue teorizada desde otros ámbitos intelectuales- ya que, como la mexicana y a diferencia de las anteriores, no fue tan diversa ideológicamente en su interior y, por lo tanto, resulta más susceptible de ser caracterizada a partir de generalizaciones.

Regresando al escenario latinoamericano, este formato irruptivo y masivo que fue recurrente en el ciclo ascendente de los movimientos populares se ha vuelto tan

esporádico que el episodio brasileño aparece aislado y excepcional en los últimos años. Al mismo tiempo, los claroscuros de este movimiento proyectan tendencias que encontramos en los otros escenarios del progresismo latinoamericano: deterioro hegemónico del lulismo pero debilidades de las izquierdas, aunque en Brasil, a diferencia de otros países como Venezuela y Argentina, más allá del golpeteo mediático y de la rutinaria gimnasia opositora de las derechas, no es particularmente evidente el repunte de las derechas.

Revolución pasiva, hegemonía y ordinaria administración del conflicto

En otros países gobernados por partidos o coaliciones progresistas como Uruguay, Ecuador y Bolivia no aparecieron estallidos, irrupciones o la conformación de amplias convergencias de oposición de derecha o izquierda. Al margen de las rutinarias manifestaciones de la conflictividad –particularmente incandescentes en Bolivia- no se dieron situaciones críticas o sobresaltos significativos del orden político que rebasaran el margen de maniobra de la ordinaria administración del conflicto propio del ejercicio de gobierno en el contexto de sociedades capitalistas dependientes como las latinoamericanas. Las prácticas reiteradas, regulares, convencionales de conflictividad social sin mayor trascendencia política constituyen el telón de fondo de la vida cotidiana, un telón que sólo se levanta eventualmente y ocasionalmente para que aparezcan escenarios y puestas en escena con implicaciones dramáticas y desenlaces inciertos, potencialmente desestabilizadores y episódicamente destituyentes.

En todos los países latinoamericanos gobernados por fuerzas progresistas se observan regularmente altos niveles de conflictividad ordinaria. Aunque haya importantes esfuerzos de registro en diversos países, no es fácil medirlos cabalmente por falta de datos precisos y comparables en el tiempo, menos aún a escala latinoamericana.⁴ Corriendo el riesgo que comporta toda generalización podemos afirmar que, *grosso modo*, se mantienen en el mediano plazo elevados niveles de conflictividad en relación con movilizaciones ligadas a reivindicaciones laborales, protagonizadas por trabajadores organizados, y a demandas de vivienda y servicios o

⁴ Además del trabajo de los comités del OSAL de CLACSO lamentablemente interrumpido en 2012 hay que señalar el seguimiento del conflicto que se realiza en Argentina, en el Centro Andino de Acción Popular en Ecuador, en Provea en Venezuela, en la UNESP en Brasil.

reivindicaciones ligadas al uso del territorio, sostenidas por sectores populares urbanos; los dos actores de la gran mayoría de los eventos de protesta registrados. En este sentido se puede entender que, aún en ausencia de intensos ciclos de protesta como en el pasado o de grandes sobresaltos críticos –con excepción del levantamiento policiaco del 2011- la conflictividad en Ecuador en los años 2009-2011 sea la mayor registrada en los últimos 15 años, años plagados de crisis políticas y protagonismo de movimientos sociales (Ramírez Gallegos, 2013). Por el contrario, pero confirmando que el cruce entre datos sobre movilizaciones y movimientos políticos y dinámicas de conflictividad ordinaria genera una tensión entre análisis cualitativo y cuantitativo de la conflictividad social y política que impiden interpretaciones univocas y generalizadoras, puede señalarse el caso venezolano. En éste el dato de la disminución de los conflictos en 2013 contrasta con la evidente alta tensión política a lo largo del año, en particular en la segunda mitad y con el posterior estallido de la crisis política desde febrero de 2014.⁵

Así que sigue en pie una pregunta fundamental: ¿aumentan, se mantienen o disminuyen los conflictos sociales ordinarios? Y en todo caso, ¿por qué se da una tendencia o la otra? ¿Se debe a mayor o menor capacidad de resolución de conflicto desde arriba o mayor o menor capacidad de conflicto y negociación desde abajo? ¿Cuál es su relación con la aparición o menos de escenarios de crisis política?

La anteúltima pregunta es particularmente delicada porque involucra una cuestión crucial. Tradicionalmente, la lógica y la dinámica de la contención de las protestas en el marco de un escenario de negociación es un dispositivo tanto recurrente como eficaz para evitar la politización y la radicalización de las clases trabajadoras. En particular, en los conflictos protagonizados por trabajadores sindicalizados⁶, la disputa

⁵ Según el informe de PROVEA (2013) sobre la conflictividad, si bien disminuyeron las protestas un 20% en 2013 (según sugieren por la muerte de Chávez), aumentaron sensiblemente las protestas políticas. Aunque la mayoría de los conflictos fue por derechos laborales, de vivienda y/o en torno a la educación, es significativo que casi uno de cada cuatro (un total de 1.044, equivalente a 23,67%) fuera por demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia. Y al interior de éstos un 7% corresponde a protestas para exigir derechos políticos, situación inédita en los últimos 4 años. En total se reportaron 302 protestas con contenido político y más de la mitad de ellas en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales.

⁶ Aún cuando el peso de los trabajadores sindicalizados y organizados tiende a decrecer frente al aumento de la precarización, flexibilización, el subempleo y la informalidad, las movilizaciones ligadas a cuestiones laborales nunca dejaron de ser cuantitativamente las más

por el excedente se juega en términos de la concesión de mejoras salariales que sólo eventualmente involucran demandas de ampliación de derechos o cuestiones de alcance político general. Los gobiernos progresistas latinoamericanos, inspirados en el modelo socialdemocrático o en su versión nacional-popular propia de la tradición de la región, apelan a dinámicas de institucionalización para operar la regulación del conflicto por medio de la negociación y la repartición de beneficios entre organizaciones patronales y de trabajadores, fragmentándolos sectorialmente, por ramas productivas.⁷ Estas prácticas clásicas enmarcan la acción de las organizaciones sindicales –aliadas u orgánicamente integradas al bloque político en el poder- que solo ocasionalmente rompen los perímetros de la negociación y se lanzan hacia el conflicto en mar abierto. Al mismo tiempo, ocasional o regularmente, dependiendo de los contextos nacionales y de una menor eficacia de las conexiones entre gobiernos, partidos y sindicatos y las tradiciones más combativas de estos últimos, se producen escenarios de conflictividad franca y abierta, como se registraron por ejemplo en Bolivia en mayo 2013 y en Argentina en abril de 2014, para poner dos ejemplos.

A estas luchas hay que sumar las que protagonizan con frecuencia y extensión, aunque generalmente en forma esporádica y dispersa, los habitantes de barrios populares. Se trata de luchas de trabajadores en el contexto de la reproducción de su existencia, ligadas a la informalidad laboral, a la vivienda, a los servicios, a las tarifas y al entorno urbano (ambiente e infraestructura). Cuantitativamente estas luchas ocupan el segundo lugar en la contabilidad de los conflictos sociales y su extensión y resolución depende de la voluntad y capacidad de los gobiernos -locales y no nacionales- de responder a grupos que pueden ser muy estructurados, donde

frecuentes en términos relativos en todos los países latinoamericanos donde, a pesar de los bajos índices de sindicalización en comparación con otras regiones y de los altos niveles de informalidad, las dinámicas de conflicto y negociación constituyen formas tradicionales que se repiten en el tiempo y forman parte del horizonte cotidiano de la conflictualidad. Los trabajadores sindicalizados del sector público, en particular en la salud y en la educación, aparecen en todos los registros anuales de la conflictualidad en América Latina. El caso emblemático, por su extensión y combatividad, suele ser el sindicalismo magisterial cuyo recurrente recurso a la protesta es parte de su configuración identitaria y su cultura política de oscilación y combinación entre conflicto y negociación, salvo recurrir esporádicamente a la rebelión.

⁷ Posiblemente con excepción del gobierno ecuatoriano que, por una explícita decisión política de tipo jacobino, evita la negociación corporativa y, en consecuencia, enfrenta un número elevado de conflictos laborales.

tradiciones de organización remontan a las épocas de instalación en décadas pasadas, a formas más espontáneas que dejan legados organizacionales y comunitarios hasta experiencias puntuales sin mayor trascendencia.

Por otra parte, con regularidad se asiste en algún país latinoamericano, pero nunca en todos, en la aparición de algún movimiento campesino que adquiera dimensión y proyecciones nacionales.⁸

No es casual que donde el conflicto tiende a salirse de control en los últimos años es en la periferia del sistema político y de las relaciones clientelares y corporativas, allí donde la extensión y profundización del despojo capitalista del territorio llamado extractivismo (extensión de minería a cielo abierto, grandes proyectos hidroeléctricos, etc.) desencadena la resistencia de una serie de movimientos denominados socioambientales. En efecto, una mención especial merecen estas luchas en defensa del territorio, en forma creciente, fueron recuperando o generando fuertes tejidos comunitarios de resistencia y rebelión, lograron denunciar y dar visibilidad al fenómeno general del despojo capitalista por medio del extractivismo en sus expresiones locales, donde en efecto se manifiestan los agravios concretos. Si bien la aceleración de las inversiones ligadas a megaproyectos rebasa la capacidad de ejercer poder de veto por parte de los numerosos frentes de resistencia, hay que señalar que los triunfos obtenidos en este rubro son ejemplares y significativos, siempre más numerosos y contrastan con la dificultad o la incapacidad por parte de otros movimientos de obtener resultados en otros ámbitos sociales.

Todo sumado, aún en medio de episodios y contratendencias, el formato de la revolución pasiva (con sus correlatos de cesarismo progresivo y transformismo) conserva niveles y márgenes de eficacia a nivel político, mayores o menores según el país y la coyuntura, en tanto logra frenar y contener a su derecha y a su izquierda el crecimiento de las oposiciones. La persistencia de niveles de ejercicio hegemónico del poder por parte de los gobiernos progresistas se finca en altos y relativamente estables niveles de consenso obtenidos por medio del uso de eficaces y extensos mecanismos clientelares y corporativos difundidos entre vastos sectores populares a raíz del retorno del uso generalizado de políticas redistributivas de corte asistencial. A partir de este despliegue de dispositivos y con la carta de la gobernabilidad en la

⁸ En 2013, esto sucedió de forma sobresaliente en Colombia, con el movimiento de las dignidades, pero no en los países gobernados por fuerzas progresistas.

mano, los gobiernos progresistas lograron un gran margen de negociación con sectores empresariales nacionales e internacionales interesados en hacer negocios en condiciones de estabilidad política y social. Hacia su costado izquierdo, la práctica hegemónica operó y sigue operando no sólo por medio de la adhesión orgánica de vastos contingentes populares a las redes socio-políticas y a los canales institucionales sino, frente a sectores críticos, por medio del chantaje y el espectro de un eventual retorno de la derecha al gobierno. Por otra parte, el control burocrático de los principales sindicatos así como la influencia en los barrios populares irrigados con las políticas sociales focalizadas restringe el campo de acción y los márgenes de maniobra de iniciativas independientes y orientadas a sostener e impulsar la autonomía de organizaciones y movimientos sociales.

Al mismo tiempo, justamente esta combinación de reformismo y conservadurismo produce un indeseado rebote en tanto, así como generan consenso en el corto y eventualmente en el mediano plazo, producen insatisfacción y rechazo ya que no resuelven las contradicciones estructurales de las sociedades capitalistas dependientes latinoamericanas. Dicho esquemáticamente, la derecha, en representación directa de los intereses de las clases dominantes, salvo concesiones coyunturales, se resiste tendencialmente a pagar los costos de cualquier grado de redistribución, mientras que en la izquierda se hacen evidentes los límites objetivos y subjetivos de políticas paliativas que no revierten substancialmente las condiciones de explotación y dominación que siguen determinando la vida de las clases subalternas, a lo cual se agrega el deterioro de condiciones de vida ligada a la mercantilización y consiguiente saqueo del territorio y el ambiente.

En síntesis, salvo el caso de las irrupciones de junio y julio 2013 en Brasil, algunos sobresaltos en Argentina y la crisis venezolana iniciada en febrero 2014, la conflictividad y la protesta en los países latinoamericanos se desarrolló principalmente en un plano ordinario, sin alcanzar a generar un escenario de crisis política, lo cual da cuenta de una relativa estabilidad de los equilibrios socio-políticos en la región.

Al mismo tiempo, la eficacia del modelo progresista en su dimensión de desmovilización relativa parece confirmarse si consideramos que el país con mayor nivel de conflictividad social parece ser México que, junto con Colombia, es el último baluarte de la ortodoxia neoliberal, siendo que en Chile, justo en 2013, la derecha sufrió una brutal derrota electoral.

Crisis de la hegemonía progresista, crecimiento de las derechas y debilidad de las oposiciones de izquierda

Si bien la conclusión anterior se basa en una tendencia comprobable, por otra parte, es notable como, al margen de fenómenos excepcionales de irrupción de movimientos y a contratendencia de lo señalado anteriormente, se observan señales de debilitamiento de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Emergen ciertos signos de una pérdida de consenso que parecería estar anunciando el fin de la etapa hegemónica y el inicio de un periodo más problemático, convulsionado por el recobrado protagonismo de las derechas y, con ellas, del revanchismo político de las clases todavía económicamente dominantes y de los intereses imperialistas parcialmente afectados en los últimos lustros. Más que por la emergencia de procesos de movilización y de politización de la protesta en el seno de las clases subalternas, el ciclo progresista latinoamericano parece ser amenazado por la derecha.

El desgaste de los gobiernos progresistas y el crecimiento de capacidad opositora de las derechas venezolanas, brasileñas, bolivianas, argentinas, uruguayas y ecuatorianas se manifiesta no sólo a nivel electoral, sino también por medio del creciente recurso a las manifestaciones callejeras y al uso del repertorio de acciones de protesta en particular en Argentina y en Venezuela donde la derecha recurre directamente a la movilización callejera como arma e instrumento de lucha. Estas derechas siguen teniendo divisiones internas y no parecen estar todavía en condición de recuperarse plenamente de la derrota histórica de la década del 2000; sin embargo, justo en comparación con este punto de partida, es clara una tendencia ascendente, relativa y equivalente al debilitamiento de sus rivales políticos.

La crisis venezolana nos presenta en este sentido un escenario particularmente dramático, el pasaje más incandescente de la coyuntura latinoamericana, en el cual una descarada ofensiva reaccionaria con una significativa capacidad de convocatoria y de movilización social –en particular entre sectores estudiantiles- se monta sobre las debilidades de una economía rentista, una redistribución de la riqueza no anclada en el empleo y la producción y la relativa desmovilización y despolitización en sentido autónomo de las clases subalternas, sometidas a mediaciones caudillistas, partidarias y burocráticas. En una secuencia dramática, la enfermedad y la posterior muerte de Chávez, la conmoción popular, la campaña electoral, la estrecha victoria por apenas 235 mil votos de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, la consiguiente impugnación de los resultados por parte de la oposición y el escenario de

abierta y violenta confrontación iniciado en febrero 2014 en un contexto de franco deterioro de la economía con elementos particularmente sensibles como la inflación (56,2% en 2013 aumentando 35,6% con respecto al año anterior), el desabastecimiento y escasez de productos que generó saqueos e influye en el crecimiento de la criminalidad -de por sí un flagelo que las políticas sociales del chavismo no lograron contener. Apareció en los últimos meses el espectro de la guerra civil y de la ingobernabilidad frente al desborde de la protesta, impulsada y financiada por parte de las oposiciones de derecha y ultraderecha pero sostenida por una base social que no se limita a algunos grupos de choque.

Si a ello agregamos los recientes resultados electorales en Ecuador y Argentina como botones de muestra de una importante erosión de la aprobación de las fuerzas progresistas pro-gubernamentales y vislumbramos el impacto de las probables protestas en Brasil en ocasión del próximo mundial de Fútbol, podemos hipotetizar que el ciclo de los gobiernos progresistas está entrando en una etapa post-hegemónica. Se estaría en presencia de un delicado tránsito en el cual el impulso inicial, el encanto y la eficacia del reformismo redistributivo empiezan a diluirse, se desgajan las coaliciones políticas y las alianzas sociales y, sin méritos propios, casi por inercia, vuelven a asomar la cabeza, después de haber sido reducidas a su mínima expresión histórica, las derechas oligárquicas y neoliberales.

En Argentina, una clara demostración de recobrada capacidad de convocatoria social de la derecha después del conflicto del campo en 2008, se dio en el llamado #18A de 2013, donde protestaron alrededor de un millón de personas convocadas principalmente por redes sociales, en una secuencia de manifestaciones de oposición al kirchnerismo que ya había tenido expresiones significativas en septiembre y noviembre de 2012. Si a esto agregamos los decepcionantes resultados electorales, la huelga policial, los saqueos y las protestas por los cortes de luz y el reciente paro nacional de abril, tenemos un escenario de aumento de las tensiones, de fortalecimiento de distintos frentes opositores y de sensible debilitamiento de la capacidad hegemónica del kirchnerismo, más aún en el contexto de las disputas y divisiones internas ligadas a la sucesión de Cristina Fernández.

Ya que en 2013 las protestas en Brasil resquebrajaron el mito del lulismo, aún sin afectar su eficacia en el corto plazo, quedan pocos gobiernos que puedan ser asumidos como modelos de gobernabilidad progresista. En Bolivia el recurso a las presiones desde abajo, ejercitando un persistente poder de veto, véase, como reciente

botón de muestra, las movilizaciones de la COB en 2013 o las más recientes ligadas a la ley minera, siguen siendo un factor y un formato que mantiene altos los niveles y las prácticas de confrontación socio-política aún en un contexto de sostenida fuerza del *evismo* y del MAS y de una correspondiente debilidad crónica de las derechas que no se recuperaron de las reiteradas derrotas de los años 2000. En Ecuador, el triunfalismo del gobierno de Correa ha sido recientemente trastocado por el repunte electoral de las derechas y las movilizaciones esporádicas pero significativas de maestros, indígenas y ambientalistas. En este contexto, probablemente, sea el gobierno del Frente Amplio el único que pueda todavía proyectarse como modelo o que cumpla con los requisitos del mito de la *pax* socialdemocrática, ya que, en efecto, en Uruguay los altos niveles de consenso se reflejan tanto en los resultados electorales -que reiteradamente confirman la supremacía frenteamplista frente a las derechas y sin oposiciones a la izquierda- como en la contención del conflicto mediante el ejercicio de un eficaz control social operado por medio de la ramificación de organizaciones sindicales confederadas en el PIT-CNT. Hasta el reciente giro abiertamente pro-extractivista del gobierno del FA en el caso de minera Aratirí logra imponerse a demostración de una capacidad hegemónica que evita un desborde de la protesta y no pone en duda el recambio presidencial en la continuidad.⁹

En medio del desgaste hegemónico de los gobiernos progresistas, de repunte de las derechas, de esporádicas pero significativas movilizaciones masivas desde abajo, las oposiciones de izquierda en todos estos países mostraron ser relativamente débiles, simples actores secundarios de la política latinoamericana de nuestros días. Debilidades distintas ya que en algunos casos se observa un crecimiento sin que, por el momento, se deje de operar en un plano testimonial para ejercer un contrapoder significativo (por ejemplo, el FIT en Argentina) mientras que en otros decrecen, decepcionan las expectativas o están en vía de desaparición (por ejemplo, la Alianza Pluricultural en Ecuador o las varias izquierdas socialistas en Brasil). En Bolivia, por ejemplo, a nivel partidario, aún obteniendo creciente apoyos a nivel urbano, el Movimiento Sin Miedo tiene un perfil clasista e ideológico poco definido en sentido popular y poca o nula penetración en el campo, la COB no rebasa el umbral

⁹ Aunque el retorno de Tabaré Vázquez anuncia un ajuste de la línea política en sentido conservador.

corporativo y otros movimientos indígenas opositores no trascienden más allá de cierta presencia localizada regionalmente en las tierras bajas (en torno al conflicto del TIPNIS) o del altiplano (alrededor de indianismo katarista). En Venezuela, sumergidas en los debates internos al chavismo, las izquierdas no orgánicamente vinculadas al PSUV no tienen visibilidad y margen de maniobra suficiente, además de estar enredadas en la actual polarización que no les permite cuestionar abiertamente los límites y las involuciones del proyecto bolivariano.

Sin embargo, aun en medio de estas objetivas dificultades, la persistencia del conflicto como dinámica social y como crisol de procesos de subjetivación política, sigue ofreciendo escenarios, posibilidades y oportunidades para un resurgimiento de perspectivas de izquierdas las cuales, hay que reconocerlo, se resisten a estructurarse organizativa e ideológicamente desde lógicas clasistas y socialistas y tienden a quedarse en un estado más difuso, episódico o, en alternativa, más ancladas a marcos comunitarios y genéricamente populares.

Una advertencia desde el pasado

Si bien, en sentido estricto, la historia no se repite, notables similitudes entre épocas puede servir para pensar las dinámicas de los procesos socio-políticos y político-institucionales, sus conexiones y sus contradicciones. En particular, hay que recordar que la última vez que se contaron tantos gobiernos progresistas en América Latina fue entre los años 30 y 40, como consecuencia de la oleada de luchas socio-políticas que, en las dos décadas previas, quebraron el orden oligárquico e impulsaron movimientos nacional-populares y gobiernos progresistas, desarrollistas o *populistas* que se instalaron, bajo modalidades específicas, en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Estos gobiernos promovieron *revoluciones pasivas*, es decir emprendieron transformaciones relevantes y significativas pero limitadas (según los casos) y, al mismo tiempo, desmovilizaron, subordinaron, controlaron o cooptaron las organizaciones que las clases subalternas había forjado en el ciclo ascendente de lucha. Como resultado, terminada la coyuntura favorable tanto a nivel económico como geopolítico (entre la segunda guerra mundial y el inicio de la guerra fría), la imposibilidad de sostener el equilibrio interclasista y el deterioro del consenso de grupos dirigentes permitieron un retorno de las derechas en el escenario político que no pudo ser contenido por el recurso a la movilización popular ya que éste había sido desactivado desde arriba. Sólo una década después, desde finales de los años 50

pero particularmente en los 60, bajo el aura de la revolución cubana, se iniciará otro ciclo de luchas pero ya no bajo las desgastadas banderas nacional populares, sino bajo consignas socialistas revolucionarias las cuales se estrellarán en la violencia contrarrevolucionaria y el terrorismo de Estado de los años 70.

La moraleja para el presente es que la desmovilización y despolitización, promovidas con fines de gobernabilidad por parte de gobiernos progresistas, termina por debilitar no sólo los movimientos sociales en su autonomía y su capacidad de defensa de los intereses de las clases subalternas, sino todo el campo popular a la hora de enfrentar las ofensivas de las clases dominantes en sus intentos por recuperar el control del aparato de estado.

En el cierre de la etapa hegemónica de los gobiernos progresistas, las coyunturas críticas y los conflictos podrían multiplicarse, las posiciones políticas polarizarse y los caminos bifurcarse. La restauración derechista no es un desenlace inexorable no tanto por la resistencia de fuerzas partidarias incrustadas en los aparatos estatales y ejerciendo el poder desde arriba, sino en la medida en que se reactiven las fuerzas populares y los movimientos antagonistas y autónomos que, desde abajo, hace aproximadamente una década, hicieron posible el cambio de época.

Referencias bibliográficas

- Antunes, Ricardo (2013). "As rebeliões de junho de 2013" en OSAL, núm. 34, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 2013.
- Braga, Ruy (2013). "As jornadas de junho no Brasil: Crônica de um mês inesquecível" en OSAL, núm. 34, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 2013.
- Modonesi, Massimo (2013a). "Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio de siglo" en Massimo Modonesi (coordinador). Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci. México: FCPyS-UNAM.
- _____ (2013b). "El fin de la revolución pasiva en Brasil" en La Jornada, 22 de junio de 2013, México.
- PROVEA (2013). Informes sobre Conflictividad Social en Venezuela 2013. Versión digital en <http://www.conflictive.org.ve/carceles/observatorio-venezolano-de-conflictividad-social-informe-de-la-conflictividad-social-en-venezuela-en-2013.html> Web visitada el 14-04-2014
- Ramírez Gallegos, Franklin (Coord.) (2013). Nuda política. Democracia, participación y conflictos. Ecuador 2009-2012. Quito: Flacso-Ecuador.
- Zibechi, Raúl. (2013). "Debajo y detrás de las grandes movilizaciones" en OSAL, núm. 34, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 2013.